



**Asamblea General**

Distr.  
GENERAL

A/HRC/WG.6/4/CAN/3  
24 de noviembre de 2008

ESPAÑOL  
Original: FRANCÉS/INGLÉS

---

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS  
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal  
Cuarto período de sesiones  
Ginebra, 2 a 13 de febrero de 2009

**RESUMEN PREPARADO POR LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO  
PARA LOS DERECHOS HUMANOS CON ARREGLO AL PÁRRAFO 15 c)  
DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL CONSEJO  
DE DERECHOS HUMANOS\***

**Canadá**

El presente informe constituye un resumen de las comunicaciones presentadas por 50 interlocutores<sup>1</sup> para el examen periódico universal. Se ha preparado conforme a las directrices generales adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. La falta de información o de atención dedicada a determinadas cuestiones puede deberse a que los interlocutores no se han referido a ellas en sus comunicaciones. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El informe se ha preparado teniendo en cuenta que la periodicidad del examen en el primer ciclo es cuatrienal.

---

\* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

## I. ANTECEDENTES Y MARCO

### A. Alcance de las obligaciones internacionales<sup>2</sup>

1. El Sindicato Nacional de los Trabajadores del Sector Público y General (NUPGE) pidió al Gobierno que ratificara los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nos. 29, 98 y 138<sup>3</sup>.
2. Independent Living Canada (ILC) recomendó al Canadá que ratificara la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo<sup>4</sup>. La Ligue des droits et libertés (LDL) recomendó al Canadá que ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes<sup>5</sup>. Acción Canadá para la Población y el Desarrollo (ACPD) recomendó al Canadá que ratificara la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares<sup>6</sup> y Amnistía Internacional le exhortó a que ratificara todos los instrumentos antedichos, así como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas<sup>7</sup>.
3. Según la Asamblea de Primeras Naciones, el Gobierno había declarado que, a su modo de entender, la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas no tenía efecto jurídico en el Canadá, y que sus disposiciones no constituían derecho internacional consuetudinario<sup>8</sup>. En la comunicación conjunta N° 4<sup>9</sup> se expresaban preocupaciones similares, y se añadía que el Canadá estaba tratando de impedir que la Organización de los Estados Americanos (OEA) utilizara la Declaración como norma mínima al negociar el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas<sup>10</sup>. La Comisión Canadiense de Derechos Humanos (CHRC) lamentó la decisión del Canadá de votar en contra de la Declaración<sup>11</sup>. La Familia Franciscana Internacional, la comunicación conjunta N° 5<sup>12</sup>, la LDL y Amnistía Internacional exhortaron al Canadá a que modificara su postura<sup>13</sup>.
4. La Familia Franciscana Internacional recomendó al Canadá que reconociera oficialmente el derecho al agua tal y como se presentaba en la Observación general N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>14</sup>.

### B. Marco constitucional y legislativo

5. En la comunicación conjunta N° 2<sup>15</sup> se recomendó al Gobierno que utilizara las disposiciones de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas como principios y normas mínimas en la aplicación de los tratados para asegurar mejores relaciones<sup>16</sup>.
6. El Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MEPACQ) señaló que el Canadá seguía negándose a reconocer la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales<sup>17</sup>.
7. La Canadian HIV/AIDS Legal Network (AIDSLAW) dijo que el Régimen de acceso a medicamentos del Canadá, que permitía a las empresas del país que fabricaban medicamentos genéricos producir y exportar legalmente a los países en desarrollo versiones de medicamentos patentados a costes más bajos, era innecesariamente complejo y farragoso<sup>18</sup>.
8. La Native Women's Association of Canada (NWAC) recomendó al Canadá que asegurara una plena participación de las mujeres aborígenes en el estudio conjunto sobre aplicación del Gobierno y las Primeras Naciones, exigido por el proyecto de ley C-21, que eliminaba la exención de la Ley de asuntos indios de las denuncias de discriminación en la jurisdicción federal<sup>19</sup>. La CHRC dijo

que se había expresado apoyo a la idea de reemplazar la Ley de asuntos indios por una legislación más moderna y eficaz que permitiera y apoyara un gobierno autónomo de las Primeras Naciones<sup>20</sup>.

### **C. Estructura institucional y de derechos humanos**

9. En la comunicación conjunta N° 6<sup>21</sup> se señaló que el Gobierno federal había afirmado que las dificultades existentes en las relaciones federales/provinciales/territoriales obstaculizaban el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de tratados, pero señaló que cuando el Canadá firma un tratado internacional de derechos humanos, todos los niveles de gobierno quedaban vinculados por él<sup>22</sup>. En la comunicación conjunta N° 1<sup>23</sup> se recomendó establecer un proceso coordinado y transparente para supervisar la aplicación, que contara con la participación de ambos niveles de gobierno, los pueblos indígenas y la sociedad civil<sup>24</sup>.

10. El Centre for Research-Action on Race Relations (CRARR) señaló que las víctimas de discriminación a nivel federal dependían exclusivamente de la CHRC para la investigación de sus denuncias y su eventual remisión al Tribunal de Derechos Humanos del Canadá. En los casos en que la Comisión decidía remitir las denuncias al Tribunal, las víctimas debían sufragar los gastos del proceso, y o bien carecían de representación o bien tenían que pagar ellas mismas las costas de los abogados<sup>25</sup>.

11. El Centro Internacional para la Justicia de Transición dijo que el Acuerdo sobre los internados indígenas de septiembre de 2007 incluía disposiciones relativas a compensaciones económicas, una comisión de la verdad y otras medidas de recuperación para los supervivientes<sup>26</sup>. El Centro recomendó, entre otras cosas, que el Gobierno respetara la plena independencia de la comisión, y que ésta diseñara mecanismos adecuados para velar por que la información que pudiera resultar de interés para el sistema de justicia penal no se perdiera y por que no se viera obstaculizada la aplicación de la ley<sup>27</sup>.

12. En la comunicación conjunta N° 2 se recomendó al Gobierno que estableciera comisiones en la Cámara de los Comunes y el Senado del Canadá para tratar las relaciones exteriores de los pueblos indígenas<sup>28</sup>.

### **D. Medidas de política**

13. Amnistía Internacional afirmó que el hecho de que el Canadá no facilitara datos desglosados de forma sistemática podía ocultar a la vista problemas de derechos humanos de vital importancia para las poblaciones vulnerables, y que las deficiencias en el suministro de datos eran particularmente graves en el caso de los pueblos indígenas<sup>29</sup>.

14. Ecumenical Justice Initiatives (KAIROS) dijo que el Canadá necesitaba una estrategia nacional en materia de vivienda, una política nacional de energía y una estrategia para combatir y erradicar la pobreza<sup>30</sup>.

15. ILC señaló que en el documento de 2007 titulado "From Vision to Action: Building an Inclusive and Accessible Canada" (de la visión a la acción: construcción de un Canadá inclusivo y accesible), firmado por 99 organizaciones de discapacitados, se incluía un marco específico para abordar las cuestiones relativas a los derechos de los canadienses con discapacidad<sup>31</sup>. La Disability Rights Promotion International-Canada (DRPI-Canadá) dijo que se debería permitir una mayor participación de las personas con discapacidad en todos los programas, políticas o iniciativas legales que fueran a afectarles<sup>32</sup>. El Council of Canadians with Disabilities (CCD) formuló recomendaciones similares<sup>33</sup>.

## **II. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL TERRENO**

### **A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos**

16. En la comunicación conjunta N° 4 se dijo que el Canadá había llegado a la conclusión errónea de que no resultaba apropiado que el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas promoviera la aplicación de la Declaración en lo que se refería al Canadá, dado que el país había votado en contra de su adopción<sup>34</sup>.

### **B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos**

#### **1. Igualdad y no discriminación**

17. La Asamblea de Primeras Naciones dijo que los ciudadanos de las Primeras Naciones estaban en situación de desventaja en cuanto a niveles de ingresos propios, educación y salud, y excesivamente representados en las tasas de encarcelamiento y discapacidad y los índices de mala salud, suicidio y pobreza<sup>35</sup>. La CHRC dijo que, según el Investigador de las Penas Correccionales del Canadá, los presos aborígenes eran a menudo objeto de discriminación institucional y sistémica<sup>36</sup>. La Canadian Coalition for the Rights of Children (CCRC) dijo que, en 2008, el Auditor General del Canadá había confirmado las investigaciones en que se sacaban a la luz desigualdades entre la financiación destinada a los servicios para el menor y la familia de las Primeras Naciones y la destinada a los niños no aborígenes. La CCRC dijo que los niños con discapacidad, inmigrantes o refugiados y los que vivían en las zonas rurales también estaban expuestos a ser marginados y a recibir un trato distinto<sup>37</sup>.

18. La Feminist Alliance for International Action (FAFIA)<sup>38</sup> señaló que las mujeres aborígenes estaban discriminadas en la fuerza de trabajo, dado que su representación en puestos de trabajo menos remunerados y precarios era desproporcionadamente alta, sus tasas de desempleo eran más elevadas y sus ingresos eran más bajos. Las mujeres aborígenes tampoco tenían los mismos niveles de educación que las no aborígenes, y su esperanza de vida era menor<sup>39</sup>.

19. El CCD dijo que más del 55% de los adultos con discapacidad en edad de trabajar carecían de empleo o estaban fuera del mercado laboral. En el caso de las mujeres con discapacidad, esa cifra rondaba el 75%<sup>40</sup>.

20. La NWAC afirmó que, en marzo de 2008, el Gobierno había presentado un proyecto de ley sobre las viviendas familiares en las reservas y los intereses o derechos conyugales, pero que para tener algún tipo de valor, los derechos debían ser accesibles y ejecutables. La NWAC instó a que se dieran pasos concretos para asegurar la aplicación de las medidas no legislativas recomendadas por las mujeres aborígenes. Señaló que era evidente que los problemas sistémicos de la violencia contra la mujer, el limitado acceso a la justicia, la pobreza y la vivienda, así como la cuestión del poder de los jefes y consejos sujetos a la Ley de asuntos indios, debían abordarse en paralelo a la aprobación de reformas legislativas<sup>41</sup>.

21. Egale Canada dijo que algunas políticas de asilo y salud seguían discriminando a lesbianas, gays, bisexuales y trans<sup>42</sup>.

## 2. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona

22. La FAFIA manifestó que la violencia contra la mujer seguía siendo un problema fundamental, y que las mujeres aborígenes eran objeto de formas graves y sistémicas de violencia. Aun así, el Gobierno no había elaborado informes exhaustivos ni realizado análisis estadísticos sobre la magnitud y la naturaleza del problema<sup>43</sup>. Amnistía Internacional y la NWAC expresaron preocupaciones similares<sup>44</sup>. Amnistía Internacional dijo que las cifras de 1996 mostraban que las mujeres indígenas de 25 a 44 años reconocidas como indias en virtud de la Ley de asuntos indios tenían una probabilidad cinco veces superior a la de otras mujeres de morir como consecuencia de la violencia. Existía un reconocimiento general de que el racismo, la discriminación y la indiferencia contribuían a este tipo de violencia. En varias jurisdicciones se habían llevado a cabo iniciativas para mejorar la respuesta policial y el acceso por parte de las mujeres que escapaban a este tipo de violencia a servicios adaptados a sus culturas. Sin embargo, el Gobierno federal aún no había ideado una estrategia nacional acorde a la gravedad de las amenazas a que se enfrentaban las mujeres indígenas<sup>45</sup>.

23. Amnistía Internacional exhortó al Canadá a crear un órgano de supervisión independiente para las reclusas condenadas por tribunales federales, incluido un arbitraje independiente para todas las decisiones relacionadas con el aislamiento involuntario<sup>46</sup>. La FAFIA dijo que las mujeres recibían peor trato que los hombres y que sus condiciones de reclusión eran más restrictivas<sup>47</sup>.

24. La CCRC recomendó al Canadá que prohibiera toda forma de violencia contra los niños, incluido el castigo corporal, revocando el artículo 43 del Código Penal, y formuló recomendaciones sobre los planes del Gobierno federal de crear una estrategia nacional para impedir que se lesionara a los niños<sup>48</sup>.

25. La Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) del Canadá y la Federación Internacional de la Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT) destacaron el uso cada vez más frecuente por parte de la policía canadiense de una pistola de impulsos eléctricos conocida como Taser, a pesar de que en algunos casos su uso había provocado la muerte del sospechoso, en vez de su neutralización<sup>49</sup>. La LDL y Amnistía Internacional habían recomendado que se suspendiera el uso del Taser en el Canadá<sup>50</sup>.

26. Amnistía Internacional señaló que en algunas disposiciones de la legislación canadiense se tipificaba como delito la trata y se preveía la posibilidad de aplicar las leyes de inmigración tanto a sus autores como a sus víctimas. Las directrices aprobadas por el Gobierno en mayo de 2006 habían demostrado ser insuficientes<sup>51</sup>.

## 3. Administración de justicia y estado de derecho

27. ILC dijo que la cancelación del Programa de recursos ante los tribunales (*Courts Challenges Program*) en 2006 suponía un obstáculo para la igualdad de derechos, ya que el programa estaba destinado a ciudadanos que reivindicaban una igualdad ante la ley y que, sin él, no tendrían forma alguna de ejercer sus derechos<sup>52</sup>. La International Presentation Association y la comunicación conjunta N° 6 expresaron preocupaciones parecidas<sup>53</sup>. El CRARR dijo que se había restablecido el programa, pero que su aplicación se limitaba a los casos relativos a los derechos respecto de los idiomas oficiales y que las víctimas de discriminación no disponían de este tipo de asistencia financiada por el Gobierno<sup>54</sup>.

28. Amnistía Internacional dijo que, si bien la legislación canadiense permitía el enjuiciamiento penal de personas acusadas de crímenes de guerra o de lesa humanidad en el extranjero, en los

últimos ocho años sólo se había llevado a cabo un enjuiciamiento, dada la dificultad de que los tribunales canadienses emprendieran acciones civiles contra gobiernos extranjeros acusados de violaciones graves de los derechos humanos a la luz de lo dispuesto en la Ley de inmunidad estatal del Canadá<sup>55</sup>.

#### **4. Libertad de circulación**

29. El MEPACQ señaló que la puesta en marcha del programa que fusionaba en una única base de datos para toda América del Norte las listas de personas a quienes se prohibía volar vulneraba la libertad de circulación y de residencia, así como las disposiciones relativas a la protección de datos personales del Canadá<sup>56</sup>. La International Civil Liberties Monitoring Group Coalition (ICLMG) dijo que el programa permitía al Gobierno incluir en una lista nombres de personas a quienes se impedía volar, sin autorización o proceso judicial previos y sin que la persona incluida en la lista fuera informada de ello. Las personas en cuestión podían solicitar que se eliminase su nombre de la lista, pero no tenían acceso a la información en que se había basado la decisión de incluirlos. Al parecer, la etnia y la religión habían influido en muchas de esas decisiones<sup>57</sup>.

#### **5. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política**

30. Reporteros sin Fronteras (RSF) señaló que había aumentado el número de casos en que los tribunales vulneraban la confidencialidad de las fuentes. Esto se producía tras la aprobación en 2004 de una ley por la que se obligaba a los periodistas a entregar archivos y revelar fuentes a la policía cuando ésta así lo solicitaba en el marco de causas penales<sup>58</sup>. RSF recomendó al Gobierno que introdujera enmiendas al proyecto de ley C-10, que en la actualidad permitía censurar la producción cinematográfica y de vídeo<sup>59</sup>.

31. PEN Canadá (PEN) recomendó al Canadá que velara por que no se volviera a intentar limitar la libertad de expresión bajo capa de la legislación sobre derechos humanos, y por que los casos de incitación al odio se trataran exclusivamente en los tribunales conforme a lo dispuesto en el Código Penal. En este sentido, PEN Canadá instó al Gobierno a que eliminara el párrafo 1 del artículo 13 de la Ley de derechos humanos del Canadá<sup>60</sup>.

32. La ICLMG dijo que la policía, los servicios de inteligencia y otros agentes habían mostrado sospechas infundadas y etiquetado a algunas personas de forma irresponsable en el desempeño de sus funciones, por ejemplo por motivos raciales o religiosos, especialmente a canadienses musulmanes y árabes. Determinados segmentos de la población veían amenazados sus derechos por la Ley contra el terrorismo del Canadá, que había inhibido la práctica religiosa y la financiación y los programas de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a cuestiones relativas al desarrollo internacional y la promoción de los derechos humanos<sup>61</sup>.

33. La LDL dijo que, durante la cumbre de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad celebrada en Montebello en agosto de 2007, la Real Policía Montada del Canadá, la policía provincial de Ontario y la Sûreté du Québec habían reprimido las manifestaciones y limitado y restringido de forma abusiva la posibilidad de que los manifestantes expresaran sus opiniones políticas<sup>62</sup>.

34. El CRARR dijo que el programa "Abrazar el cambio" del Canadá, creado para aumentar la representación de las "minorías visibles" en la administración pública federal, especialmente en puestos directivos y ejecutivos, no había logrado sus objetivos<sup>63</sup>.

## **6. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias**

35. El NUPGE dijo que se había restringido el derecho a sindicarse, que se habían incumplido los convenios colectivos, que no se habían respetado los salarios y las prestaciones negociados libremente, que las propuestas de los empleadores se habían impuesto a los trabajadores por vía legislativa y que se había suprimido el derecho a la huelga tanto en el sector público como en el privado<sup>64</sup>. KAIROS dijo que el derecho a sindicarse y la capacidad de los sindicatos para proteger los intereses de los trabajadores se habían visto socavados por las medidas introducidas en 1995, muchas de las cuales podían vincularse a los efectos de lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que permitía a los empleadores reubicar sus actividades y dejar atrás a sus trabajadores con mayor facilidad<sup>65</sup>.

36. La LDL dijo que el Canadá no había adoptado las medidas necesarias para acabar con la explotación y la violencia sufridas por los trabajadores migratorios, como recomendó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>66</sup>. Amnistía Internacional señaló que la exigencia de que los proveedores de cuidados a domicilio vivieran en las casas de sus empleadores los exponía a ser objeto de abusos. Las diversas restricciones a los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, por ejemplo los relativos a las condiciones de salud y seguridad y las condiciones de trabajo, también incrementaban la vulnerabilidad a posibles abusos<sup>67</sup>. KAIROS añadió que los trabajadores agrícolas temporales migratorios y los proveedores de cuidados que vivían en el domicilio del empleador estaban atados a empleadores concretos, lo que les hacía especialmente vulnerables a abusos y explotación. Muchos de esos trabajadores eran obligados a trabajar de 12 a 14 horas sin cobrar horas extras por ello y, si se quejaban o trataban de organizarse o sindicarse, se los devolvía al lugar donde se los había contratado<sup>68</sup>. Amnistía Internacional dijo que los trabajadores migratorios que no tenían permiso de inmigración estaban más expuestos a sufrir actos de violencia doméstica y vulneraciones de sus derechos a manos de empleadores o propietarios sin escrúpulos<sup>69</sup>.

## **7. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado**

37. Citizens for Public Justice (CPJ) recomendó que se aprobara una estrategia federal de reducción de la pobreza para combatir este persistente problema<sup>70</sup>, y afirmó que el 10,5% de los canadienses tenían unos ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas. La CCRC dijo que se había unido a la petición de una amplia red de organizaciones no gubernamentales canadienses, auspiciada por la iniciativa "Make Poverty History" (Haz que la pobreza pase a la historia), de que el Canadá elaborara dicha estrategia, incluidas medidas concretas para abordar los diversos factores que contribuían a la pobreza infantil y estrategias preventivas para las personas sin hogar y los niños de la calle<sup>71</sup>. En la comunicación conjunta N° 3<sup>72</sup> se repitió el llamamiento para que se elaborara una estrategia nacional, y se añadió que se debía prestar especial atención a las dificultades a las que se enfrentaban las niñas sin hogar<sup>73</sup>.

38. La FAFIA dijo que el Gobierno había reducido las prestaciones de asistencia social, limitado el número de personas que podían recibirlas e incrementado las normas punitivas respecto de los beneficiarios. Ello había aumentado el sufrimiento de las mujeres, más dependientes de esa asistencia que los hombres<sup>74</sup>. La FAFIA señaló que las mujeres eran desproporcionadamente más pobres en el Canadá, y que las madres sin pareja constituían el modelo de familia más pobre<sup>75</sup>.

39. El Instituto Wellesley (WI) dijo que sus investigaciones confirmaban el aumento masivo del número de personas sin hogar desde que el Canadá redujera el gasto público en vivienda y la legislación destinada a asegurar la tenencia y otras protecciones básicas. También afirmó que la pobreza y la inseguridad en materia de vivienda afectaban de forma desproporcionada a la

población aborigen, las mujeres, los inmigrantes y los miembros de diversos grupos etnosociales<sup>76</sup>. La Pivot Legal Society (PLS) dijo que, en general, el número de personas sin techo que se veían obligadas a vivir en la calle había aumentado en la zona de Vancouver al menos en un 39% desde 2005, que el parque de viviendas de alquiler asequible seguía disminuyendo, que la protección insuficiente contra los desplazamientos ocasionados por el aburguesamiento de determinadas zonas amenazaba a las poblaciones de bajos ingresos que residían en esas zonas desde hacía tiempo y que la criminalización de la falta de hogar mediante iniciativas de vigilancia policial y seguridad privada (como consecuencia de los intereses estatales y empresariales en zonas concretas) ponía en peligro la salud y la seguridad de las personas sin techo<sup>77</sup>.

40. CPJ dijo también que no todos los trabajadores recibían un salario mínimo vital a cambio de un trabajo remunerado, y que los canadienses aborígenes, los recién llegados y los refugiados experimentaban mayores índices de pobreza, además de ser víctimas de racismo y discriminación<sup>78</sup>. Amnistía Internacional añadió que un estudio reciente de tres provincias había revelado que los niños indígenas tenían 15 veces más probabilidades de ser separados de sus familias, en la mayoría de los casos no por abusos sino por falta de atención, a menudo consecuencia de la pobreza.

41. La Familia Franciscana Internacional recomendó que se fijara un salario mínimo adecuado y que se revisara anualmente a nivel nacional a fin de permitir un nivel de vida digno. La asistencia social debería incrementarse y ajustarse de la misma forma con miras a garantizar el derecho a un nivel de vida digno para todos, sin distinción alguna<sup>79</sup>.

42. El MEPACQ dijo que, hasta 1990, cerca del 75% de los trabajadores (hombres y mujeres) sin empleo tenían acceso al seguro de desempleo, pero que tras la decisión del Gobierno federal de retirarse de la financiación de la caja del seguro de desempleo y dado el lucro cesante, apenas quedaría cubierto un 45% de los trabajadores<sup>80</sup>.

43. La LDL dijo que no se había adoptado ninguna medida con respecto a la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de que el Canadá diera pleno valor jurídico al derecho al agua y examinara su postura al respecto, para asegurar un acceso adecuado y en igualdad de condiciones al agua a todas las personas que vivieran en su territorio<sup>81</sup>.

44. La AIDSLAW dijo que, en 2007, el Gobierno había reducido la financiación de los programas relativos al VIH/SIDA en casi un 15%, y que en 2008 se habían llevado a cabo más recortes<sup>82</sup>. La AIDSLAW también señaló que la Estrategia Nacional contra las Drogas puesta en marcha en 2007 eliminaba los intercambios de agujas, las clínicas de tratamiento con metadona y los centros de venopunción supervisada, especialmente importantes para proteger la salud de las personas que consumían drogas ilegales<sup>83</sup>. La prevalencia del VIH en las cárceles era por lo menos 10 veces superior a la registrada entre la población general, y la de la hepatitis C, por lo menos 20 veces superior<sup>84</sup>. La AIDSLAW afirmó que los trabajadores sexuales eran más vulnerables a la violencia y a una posible exposición al VIH porque ciertas disposiciones del Código Penal ilegalizaban prácticamente todas las actividades relacionadas con la prostitución<sup>85</sup>.

45. La Familia Franciscana Internacional dijo que el Canadá autorizaba a las empresas mineras a verter sus desechos tóxicos a los lagos, con la consiguiente contaminación mortal de la fauna y la flora<sup>86</sup>. RightOnCanada (ROC) dijo también que cada vez se exportaban más plaguicidas y productos químicos peligrosos a países en desarrollo, que carecían de los recursos y la infraestructura necesarios para manipularlos de forma segura<sup>87</sup>.



46. Canadians for Choice (CFC) señaló que, aunque en el Canadá no existían restricciones legales al derecho al aborto, la falta de accesibilidad suponía una barrera para las mujeres que decidían interrumpir su embarazo. Sólo se practicaban abortos en uno de cada seis hospitales<sup>88</sup>.

### **8. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad**

47. KAIROS dijo que el costo de la enseñanza secundaria había estado aumentando sistemáticamente en los últimos diez años, lo que había excluido de ella a muchos jóvenes de bajos ingresos<sup>89</sup>. La FAFIA expresó preocupaciones similares y dijo que muchas mujeres pobres y madres sin pareja no podían permitirse económicamente cursar estudios superiores<sup>90</sup>.

48. En la comunicación conjunta N° 2 se recomendó al Gobierno que introdujera en los programas de estudios de todas las escuelas canadienses materias sobre tratados y acuerdos relativos a los pueblos indígenas basados en las perspectivas y las tradiciones orales de éstos, con el fin de promover la educación sobre derechos humanos<sup>91</sup>.

### **9. Minorías y pueblos indígenas**

49. La Asamblea de Primeras Naciones dijo que el Gobierno negaba a las Primeras Naciones los derechos consagrados en la Constitución del Canadá y otros instrumentos jurídicos, interpretándolos en sentido estricto o retrógrado, y que también les negaba el derecho de autogobierno mediante el ejercicio de su jurisdicción en aplicación de la Ley constitucional y la Ley de asuntos indios<sup>92</sup>.

50. KAIROS afirmó que el daño ocasionado por la activa y sonora oposición del Canadá a la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas se había visto agravado por una amplia campaña propagandística en que se presentaban la protección y la promoción de los derechos de los indígenas como una amenaza para los derechos de los no indígenas, y que alimentó la discriminación<sup>93</sup>.

51. La First Nations Summit (FNS) dijo que el Canadá negaba los títulos y derechos de las Primeras Naciones, obligándolas a embarcarse en largos y costosos litigios para defender sus derechos intrínsecos<sup>94</sup>. El Canadá también seguía negando los títulos y derechos de las Primeras Naciones protegidos en la Constitución al negociar tratados modernos, entre otras cosas cuando exigía la "modificación" de los derechos indígenas a cambio de los derechos otorgados por los tratados<sup>95</sup>. KAIROS expresó preocupaciones similares<sup>96</sup>. La FNS recomendó, entre otras cosas, que el Canadá renunciara a esa exigencia y que permitiera a las Primeras Naciones acceder a asistencia financiera en forma de contribuciones (no préstamos) para poder participar de forma efectiva en las negociaciones de los tratados<sup>97</sup>.

52. La Land Claims Agreements Coalition (LCAC) dijo que el Gobierno no había conseguido materializar plenamente el espíritu y la intención de los acuerdos modernos relativos a la tierra y sus amplios objetivos socioeconómicos, lo cual era incompatible, entre otras cosas, con el derecho a la libre determinación<sup>98</sup>. En la comunicación conjunta N° 2 se expresaron preocupaciones similares<sup>99</sup>. El Consejo del Grupo Indígena Cape Mudge (también conocido como Nación We Wai Kai o WWKN) dijo que llevaba 18 años en litigios con el Canadá por la propiedad de dos reservas indias en la Isla de Vancouver, y que el Canadá se había negado a una reconciliación adecuada. La WWKN estaba tratando de resolver ese conflicto por los medios tradicionales, mediante una ceremonia en la Casa Grande y tratando de que el Canadá le indemnizara por los costos del prolongado litigio<sup>100</sup>.

53. La Nación India del Lago Lubicon (LLIN) recordó varias decisiones de las Naciones Unidas sobre la vulneración de los derechos que correspondían a este pueblo en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y dijo que no se habían adoptado medidas provisionales de protección a pesar de la existencia de decisiones del Consejo de Derechos Humanos en las que se pedía al Canadá que lo hiciera<sup>101</sup>. La LLIN dijo que el pueblo Lubicon se había visto obligado a depender de la asistencia social para su supervivencia, y a vivir en condiciones de hacinamiento, sin acceso a los servicios básicos y con graves problemas de salud derivados de la explotación de los recursos, en particular problemas de reproducción que habían dado lugar a que los niños nacieran muertos de un total de 21 embarazos en un período de 18 meses<sup>102</sup>.

54. Amnistía Internacional dijo que había aumentado radicalmente la extracción de recursos en las tierras tradicionales de los indígenas y que las obligaciones jurídicas de consulta y consentimiento se incumplían de forma sistemática, por lo que le preocupaba que los derechos de los indígenas pudieran verse gravemente limitados mientras no se resolvieran las disputas relativas a derechos sobre las tierras<sup>103</sup>.

55. La Primera Nación Athabasca Chipewyan (ACFN) dijo que sus territorios tradicionales en Fort Chipewyan, situados río abajo de plantas de celulosa, depósitos para desechos de arenas bituminosas, minas de arenas bituminosas y otras explotaciones industriales situadas a lo largo del río Athabasca, se habían visto afectados<sup>104</sup>, por lo que sus residentes habían desarrollado una forma poco común de cáncer; el agua se había contaminado y los hábitats de los peces habían quedado destruidos; y había contaminantes en el suministro de alimentos<sup>105</sup>. La ACFN dijo que el Gobierno no había cumplido su obligación de velar por que las comunidades fueran consultadas en relación con las licencias concedidas a las industrias por el Gobierno de Alberta en los territorios tradicionales de dichas comunidades<sup>106</sup>. La ACFN afirmó que su forma de vida tradicional había desaparecido<sup>107</sup>. En la comunicación conjunta N° 5 se expresaron preocupaciones similares y se añadió que existían muchos otros ejemplos parecidos en que el Canadá no había solicitado el consentimiento de los pueblos indígenas antes de autorizar extracciones minerales en sus territorios<sup>108</sup>. La FIACAT dijo que el Gobierno no se mostraba dispuesto a discutir el impacto medioambiental de las plantas hidroeléctricas o petroleras y las concesiones forestales y mineras, y menos aún los beneficios económicos que deberían compartirse también con las comunidades indígenas del país<sup>109</sup>.

56. La Asamblea de las Primeras Naciones del Québec y de Labrador (APNQL) señaló que las Primeras Naciones disponían de un sistema educativo cuya falta de financiación era alarmante, y que estaban sujetas a normas retrógradas y humillantes aprobadas por la Ley de asuntos indios<sup>110</sup>. La Asamblea recomendó: invertir de forma masiva a largo plazo para defender el derecho de todos a una enseñanza pública de calidad y crear las condiciones necesarias para permitir el ejercicio de ese derecho por todos los miembros de las Primeras Naciones; realizar inversiones considerables para poner en marcha un sistema autóctono de protección de los jóvenes y asegurar unos recursos y un apoyo comparables a todas las familias canadienses; invertir de forma masiva e inmediata en vivienda social e iniciar negociaciones entre las autoridades federales y las Primeras Naciones sobre la jurisdicción en materia de vivienda; instaurar un sistema de gestión conjunta y establecer normas y medidas para la explotación del territorio en pie de igualdad, en un marco de soberanía compartida, teniendo en cuenta que la gestión conjunta constituía un derecho y no debía considerarse un favor como muestra de buena voluntad de las autoridades del Gobierno<sup>111</sup>.

57. La Indigenous Network on Economies and Trade (INET) dijo que la política global de reclamaciones no cumplía las normas mínimas de protección de los derechos de los indígenas sobre sus tierras consagradas en la Declaración<sup>112</sup>, y recomendó al Canadá que abandonase el "modelo de

derechos modificados" y el "modelo de no afirmación", que en la práctica equivalían a un planteamiento de rendición y extinción<sup>113</sup>.

58. La NWAC recomendó que el Parlamento exigiera informes periódicos sobre la aplicación de la Declaración al Departamento de Asuntos Indios y Desarrollo del Norte y a todos los demás Departamentos<sup>114</sup>. La Asamblea de Primeras Naciones recomendó al Canadá que empleara la Declaración como referencia para evaluar las obligaciones del Canadá con respecto a los indígenas<sup>115</sup>.

## 10. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

59. El titular de la Cátedra Canadiense de Investigación sobre Derecho Internacional de las Migraciones dijo que a menudo se consideraba que el sistema canadiense para determinar la condición de refugiado está demasiado politizado como para ser independiente, debido al nombramiento político de algunos miembros sin conocimientos ni experiencia. El catedrático dijo que en la Ley de inmigración de 2002 se habían incluido disposiciones para crear una División de Protección de los Refugiados, pero que ésta nunca se creó<sup>116</sup>. Amnistía Internacional y la Familia Franciscana Internacional expresaron preocupaciones similares<sup>117</sup>.

60. A Conscience and Peace Tax International (CPTI) le preocupaba que se estuviera expulsando a los objetores de conciencia que se negaban a realizar el servicio militar o que se les amenazara con ser expulsados<sup>118</sup>. La Cámara de los Comunes del Canadá aprobó una resolución para otorgar la condición de residente permanente a todo objetor de conciencia a una acción militar no aprobada por las Naciones Unidas, pero la resolución no era vinculante y estuvo seguida de medidas para expulsar a aquéllos a quienes habría protegido<sup>119</sup>.

61. KAIROS dijo que el Canadá obstaculizaba de diversas formas la reagrupación familiar de los refugiados y los migrantes y que, en ocasiones, los refugiados tenían que esperar años para poder reunirse con sus cónyuges y sus hijos, que a menudo vivían en situaciones de peligro y persecución<sup>120</sup>.

## 11. Derechos humanos y lucha contra el terrorismo

62. La ICLMG dijo que la Ley contra el terrorismo de 2001 contenía disposiciones sobre la prisión preventiva, la detención arbitraria, las audiencias con fines de investigación, la inclusión en listas de presuntos grupos terroristas, la desclasificación de organizaciones benéficas, la suspensión del derecho a no declarar y la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario que contravenían el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>121</sup>. La ICLMG también expresó preocupación por la Ley de seguridad pública aprobada en 2004 como complemento de la Ley contra el terrorismo<sup>122</sup>.

63. La FIACAT señaló que el problema de las expulsiones o extradiciones de individuos a países en los que, por motivos legítimos, se consideraba que podrían ser torturados era un problema muy actual en el Canadá. La FIACAT citó casos de ciudadanos canadienses de origen árabe que estaban a la espera de que se abriera una investigación exhaustiva<sup>123</sup>.

64. La ICLMG dijo que no se tenía constancia de que se hubieran aplicado las recomendaciones formuladas por el Juez Dennis O'Connor tras su investigación del caso *Arar*. El objeto de las recomendaciones era evitar el menosprecio del estado de derecho; unas prácticas deficientes de investigación; etiquetamientos de individuos e intercambios de información irresponsables; una elaboración de perfiles delictivos en función de la raza; la detención o prisión arbitrarias; y la

tortura<sup>124</sup>. Amnistía Internacional y la Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) expresaron preocupaciones similares<sup>125</sup>.

65. La Canadian Coalition for Peace and Justice (CCPJ) declaró que 18 presuntos terroristas detenidos en junio de 2006 habían sido aislados inicialmente en celdas de castigo, que 11 habían pasado 14 meses en régimen de aislamiento y que 3 seguían sometidos a ese trato inhumano, sin que se les hubiera condenado por delito alguno<sup>126</sup>. Se había recibido información preocupante sobre el trato recibido por éstos<sup>127</sup>. El proceso judicial también generó preocupación en torno al circo mediático creado, el clima político, la falta de información precisa sobre el islam y los musulmanes y los escasos recursos de que disponían los acusados<sup>128</sup>.

66. RSF respaldó los recursos interpuestos en marzo de 2008 ante el Tribunal de Apelaciones de Ontario contra el secreto de sumario impuesto por un juez de Toronto a las audiencias sobre la libertad bajo fianza en curso de 17 sospechosos de terrorismo detenidos en 2006<sup>129</sup>.

67. El MEPACQ señaló que, desde el 11 de septiembre de 2001 y tras las modificaciones introducidas en la Ley de inmigración y protección de refugiados, el Estado había expedido numerosos "certificados de seguridad", que permitían detener a residentes permanentes o extranjeros sospechosos de terrorismo sin darles a conocer las pruebas que pesaban contra ellos<sup>130</sup>. La FIACAT dijo que la práctica de los "certificados de seguridad" planteaba en primer lugar el problema de que las personas acusadas eran devueltas a países de origen donde existía el peligro de que sufrieran torturas o incluso murieran<sup>131</sup>. El Justice for Mohamed Harkat Committee (JMHC) afirmó que los certificados de seguridad se aplicaban sobre todo a musulmanes o personas procedentes de países del norte de África o del Oriente Medio<sup>132</sup>. El Canadian Centre for Victims of Torture (CCVT) dijo que su aplicación a no ciudadanos que no podían ser admitidos había conducido a una terrible situación de internamiento sin una resolución clara a la vista<sup>133</sup>. Un fallo del Tribunal Supremo contra este proceso condujo a que, en febrero de 2008, se aprobara legislación para modificar el proceso de los certificados de seguridad de forma que se incluyeran abogados especiales. Sin embargo, la capacidad de éstos para interrogar a la parte contraria o buscar pruebas de forma independiente es muy limitada, lo que podría incidir negativamente en el proceso, permitiendo y prolongando los juicios secretos<sup>134</sup>. La ICLMG, Amnistía Internacional y la CHRI expresaron preocupaciones similares<sup>135</sup>. La LDL recomendó que el Canadá derogara las disposiciones relativas a los certificados de seguridad de la Ley de inmigración y la Ley contra el terrorismo<sup>136</sup>.

68. La FIACAT dijo que el Gobierno seguía sin solicitar la repatriación de Omar Khadr, ciudadano canadiense a la espera de ser juzgado por una comisión militar en Guantánamo. La FIACAT consideraba que el Sr. Khadr era un ejemplo de niño soldado, por lo que, conforme al derecho internacional, debería ser considerado una víctima y recibir tratamiento médico y psicológico y una rehabilitación completa. La FIACAT temía que el juicio no fuese más que una mera formalidad para llegar a una condena segura y a la cadena perpetua<sup>137</sup>. ROC, la LDL, la CHRI y Amnistía Internacional expresaron preocupaciones similares<sup>138</sup>. Lawyers' Rights Watch Canada (LRWC) recomendó al Canadá que velara por que el Sr. Khadr fuera puesto en libertad y repatriado al Canadá y que investigara las violaciones de sus derechos<sup>139</sup>.

### III. LOGROS, PRÁCTICAS ÓPTIMAS, RETOS Y LIMITACIONES

69. La CHRC dijo que la Carta de Derechos y Libertades del Canadá (la Carta) garantizaba una serie de derechos humanos. Todas las asambleas legislativas provinciales y territoriales, así como el Parlamento, habían aprobado leyes específicas en las que se preveían mecanismos de recurso administrativo y judicial mediante comisiones y/o tribunales dedicados a los derechos humanos<sup>140</sup>.

70. La FNS agradeció la disculpa del Primer Ministro Harper el 11 de junio de 2008 por la participación del Canadá en el sistema de internados indígenas, y dijo que había llegado el momento de pasar de la disculpa a la acción<sup>141</sup>.

71. Amnistía Internacional señaló que se habían examinado las dificultades para garantizar que las empresas canadienses que operaban en el extranjero respetaran las normas de derechos humanos, pero que el Gobierno no había adoptado medidas para aplicar la mayor parte de las recomendaciones, que proponían un marco nacional de responsabilidad social corporativa y, entre otras cosas, un nuevo *Ombudsman*<sup>142</sup>.

72. La CHRC dijo que el Canadá era líder en el reconocimiento jurídico de los derechos de los gays y lesbianas. El Tribunal Supremo del Canadá había fallado que el derecho a la igualdad consagrado en la Carta era extensible a la orientación sexual. A septiembre de 2008, el Canadá era uno de los seis únicos Estados en los que se reconocían legalmente los matrimonios homosexuales<sup>143</sup>.

73. El Charter Committee on Poverty Issues (CCPI) afirmó que en el Canadá los problemas de las personas sin hogar, el hambre y la pobreza eran evitables, ya que no eran consecuencia de una falta de recursos: el Canadá había venido liderando el crecimiento económico del Grupo de los Ocho (G-8) en los últimos años, aunque aplicando al mismo tiempo radicales recortes de los programas sociales<sup>144</sup>.

#### **IV. PRIORIDADES, INICIATIVAS Y COMPROMISOS NACIONALES ESENCIALES**

74. ACPD dijo que, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, en que se trató el tema de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), el Canadá había acordado contribuir a la consecución de determinados objetivos relativos a la población y el desarrollo mediante la aportación de un porcentaje de su Ingreso Nacional Bruto (INB), pero que esa aportación había disminuido en los tres últimos años<sup>145</sup>. ACPD recomendó al Canadá que aplicara de forma inmediata la resolución aprobada por la Cámara de los Comunes en junio de 2005 en la que se exhortaba al Gobierno federal a que elaborara un plan para destinar el 0,5% del INB a la AOD para 2010, y que se valiera de su presidencia del G-8 en 2010 para elaborar un plan encaminado a alcanzar el 0,7% del INB para 2015<sup>146</sup>.

75. En la comunicación conjunta N° 6 se señaló que, como candidato a miembro del Consejo de Derechos Humanos, el Canadá había prometido establecer mecanismos de consulta para velar por que en todos los niveles de gobierno se conocieran y se examinaran seriamente las recomendaciones de los órganos de tratados y por que los canadienses tuvieran acceso a esas recomendaciones, pero que dichos mecanismos seguían sin existir<sup>147</sup>.

#### **V. FOMENTO DE LA CAPACIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA**

N.A.

#### **Notas**

<sup>1</sup> The list of stakeholders is being organised and compiled. The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org). (One asterisk denotes a non-governmental organization in consultative status with the Economic and Social Council. Two asterisks denote a national human rights institution with "A" status).

*Civil society*

ACFN	Athabasca Chipewyan First Nation, Fort Chipewyan, Canada
ACPD	Action Canada for Population and Development*, Ottawa, Canada
AFN	Assembly of First Nations*, Ottawa, Canada
AI	Amnesty International, London*, UK
AIDSLAW	Canadian HIV/AIDS Legal Network*, Toronto, Canada
APNQL	Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Wendake, Canada
CCD	Council of Canadians with Disabilities, Winnipeg, Canada
CCPI	Charter Committee on Poverty Issues, Huntsville, Canada
CCPJ	Canadian Coalition for Peace and Justice, Toronto, Canada
CCRC	Canadian Coalition for the Rights of Children, Ottawa, Canada
CCVT	Canadian Centre for Victims of Torture, Toronto, Canada
CFC	Canadians for Choice, Ottawa, Canada
CHRI	Commonwealth Human Rights Initiative*, New Delhi, India
CPJ	Citizens for Public Justice, Ottawa, Canada
CPTI	Conscience and Peace Tax International*, Leuven, Belgium
CRARR	Centre for Research-Action on Race Relations, Montreal, Canada
CRCIML	Canada Research Chair in International Migration Law, Montreal, Canada
DRPI-Canada	Disability Rights Promotion International Canada, Toronto, Canada
Egale	Egale Canada, Canada
FAFIA	Feminist Alliance for International Action, Ottawa, Canada
FI	Franciscans International*, Geneva, Switzerland
FIACAT	ACAT Canada and the International Federation of Action by Christians for the Abolition of Torture*, Paris, France
FNS	The First Nations Summit, West Vancouver, Canada
ICLMG	International Civil Liberties Monitoring Group Coalition, Canada
ICTJ	International Center for Transitional Justice, New York, USA
ILC	Independent Living Canada, Ottawa, Canada
INET	Indigenous Network on Economies and Trade, Vancouver, Canada
IPA	International Presentation Association*, New York, USA
JMHC	Justice for Mohamed Harkat Committee, Gatineau, Canada
JS1	Joint submission presented by 24 organisations: Promise and Reality – Canada’s International Implementation Gap, Huntsville, Canada
JS2	Joint submission presented by the International Organization of Indigenous Resource Development*, Samson Cree Nation, Ermineskin Cree Nation, Louis Bull Tribe, and Montana Cree Nation, Hobbema, Canada
JS3	Joint submission by Women’s Housing Equality Network (WHEN-Canada) and the Centre for Equality Rights in Accommodation (CERA), Ontario, Canada
JS4	Joint submission presented by 23 organisations, Montreal, Canada
JS5	Joint submission presented by the International Indian Treaty Council* and the Confederacy of Treaty No. 6 First Nations representing 18 First Nations in Alberta Canada, Edmonton, Canada
JS6	Joint submission presented by 7 organisations: British Columbia Universal Periodic Review Coalition 2008, Canada
KAIROS	KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives, Toronto, Canada
LCAC	Land Claims Agreements Coalition, Ottawa, Canada
LDL	Ligue des Droits et Libertés, Montreal, Canada
LLIN	Lubicon Lake Indian Nation, Alberta, Canada
LRWC	Lawyer's Rights Watch Canada*, Vancouver, Canada
MEPACQ	Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, Montreal, Canada
NUPGE	National Union of Public and General Employees, Nepean, Canada
NWAC	Native Women's Association of Canada*, Ohsweken, Canada
PEN	PEN Canada, Toronto, Canada
PLS	Pivot Legal Society, Vancouver, Canada
ROC	RightOnCanada, Ottawa, Canada
RSF	Reporters Without Borders*, Paris, France
WI	The Wellesley Institute, Toronto, Canada
WWKN	The Cape Mudge Band Council, Quathiaski Cove, Canada

*National human rights institution*

CHRC Canadian Human Rights Commission\*\*, Ottawa, Canada

<sup>2</sup> The following abbreviations have been used for this document:

CDESC	Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
CED	International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
CPD	Convention on the Rights of Persons with Disabilities
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
ICRMW	International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
OP-CAT	Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

<sup>3</sup> NUPGE, p. 3.

<sup>4</sup> ILC, p. 5.

<sup>5</sup> LDL, p. 1.

<sup>6</sup> ACPD, p. 5.

<sup>7</sup> AI, p. 3.

<sup>8</sup> AFN, p. 2.

<sup>9</sup> JS4: Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee); Inuit Tapiriit Kanatami; Inuit Circumpolar Council – Canada; Union of British Columbia Indian Chiefs; Chiefs of Ontario; Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs Secretariat Inc.; Québec Native Women Inc./Femmes Autochtones du Québec; Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP); Indigenous Peoples of Africa Co-ordinating Committee (IPACC); Tebtebba (Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education); Saami Council; Cordillera Peoples Alliance; Kus Kurá S.C. (Costa Rica); Programa Indígena del Centro de Asistencia Legal Popular (Cealp); Corporación de Abogados Indígenas de Panamá (CAIP); Centro de Apoyo a las tierras nativas; First Peoples Human Rights Coalition; International Indigenous Women's Forum/ Foro Internacional de Mujeres Indígenas - North America; Indigenous Peoples Rights Monitor - Philippines; Canadian Friends Service Committee (Quakers); KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives; International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA); and Forest Peoples Programme.

<sup>10</sup> JS4, p. 3.

<sup>11</sup> CHRC, p. 3.

<sup>12</sup> JS5: International Indian Treaty Council (IITC), and the Confederacy of Treaty No. 6 First Nations representing 18 First Nations in Alberta Canada.

<sup>13</sup> FI, p. 3; AI, p. 3.

<sup>14</sup> FI, p. 4.

<sup>15</sup> JS2: International Organization of Indigenous Resource Development; Samson Cree Nation; Ermineskin Cree Nation; Louis Bull Tribe; Montana Cree Nation.

<sup>16</sup> JS2, p. 3.

<sup>17</sup> MEPACQ, p. 1.

<sup>18</sup> AIDSLAW, p. 2.

<sup>19</sup> NWAC, p. 1, 2.

<sup>20</sup> CHRC, p. 3.

<sup>21</sup> JS6: British Columbia Universal Periodic Review Coalition 2008 - The Poverty and Human Rights Centre; Aboriginal Women's Action Network (AWAN); Coalition of Child Care Advocates of BC; Hospital Employees Union; Justice for Girls; Vancouver Committee for Domestic Workers and Caregivers Rights; Vancouver Rape Relief and Shelter.

<sup>22</sup> JS6, p. 7.

<sup>23</sup> JS1: Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture – Canada; L'Association québécoise des organismes de coopération internationale; Canadian Association of Elizabeth Fry Societies; Canadian Centre for International Justice; Canadian Council for International Cooperation; Canadian Council for Refugees; Canadian Federation of University Women; Canadian Journalists for Free Expression; Canadian Lawyers Association for International Human Rights; Canadian Paraplegic Association; Civil Liberties Association – National Capital Region; Communication, Energy and Paperworkers' Union; DisAbleD Women's Network Canada; Entraide missionnaire; Group of 78; Human Rights Watch; Kashmiri-Canadian Council; Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network; Oxfam Canada; Parkdale Community Legal Services; Safe Drinking Water Foundation; Social Justice Committee of Montreal; Social Rights Advocacy Centre; World Federalist Movement – Canada.

<sup>24</sup> JS1, p. 3.

<sup>25</sup> CRARR, p. 1.

<sup>26</sup> ICTJ, p. 1.

<sup>27</sup> ICTJ, p. 5.

<sup>28</sup> JS2, p. 3.

<sup>29</sup> AI, p. 3.

<sup>30</sup> KAIROS, p. 5.

<sup>31</sup> ILC, p. 2, 3.

<sup>32</sup> DRPI-Canada, p. 4.

<sup>33</sup> CCD, p. 3, 4.

<sup>34</sup> JS4, p. 2, 3.

<sup>35</sup> AFN, p. 4.

<sup>36</sup> CHRC, p. 5.

<sup>37</sup> CCRC, p. 4.

<sup>38</sup> FAFIA: A Commitment to Training and Employment for Women (ACTEW); Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC); Amelia Rising Sexual Assault Centre of Nipissing; Antigonish Women's Resource Centre; Association Feminine d'Education et d'Action Sociale (AFEAS); Assembly of First Nations; Atikokan Crisis Centre; Campaign 2000; Canadian Association of Elizabeth Fry Societies (CAEFS); Canadian Association of Sexual Assault Centres / Association Canadienne des Centres Contre les Agressions a Caractere Sexuel (CASAC); Canadian Council of Muslim Women / Conceil Canadien des Femmes Musulmanes; Canadian Federation of Students; Canadian Federation of Students Women's Caucus; Canadian Federation of University Women / Association des Femmes Diplomees des Universite (CFUW); Canadian Federation of University Women - Kanata; Canadian Federation of University Women / Federation Canadienne des Femmes Diplomees des Universites (CFUW/FCFDU) - Human Rights Committee; Canadian Labour Congress - Women's Committee / Congres du Travail du Canada (CLC); Canadian Research Institute for the Advancement of Women - National / Institut Canadien de Recherches sur les Femmes - National (CRIA); Canadian Research Institute for the Advancement of Women - Nova Scotia / Institut Canadien de Recherches sur les Femmes - Nouvelle Ecosse; Canadian Union of Postal Workers (CUPW); Canadian Union of Public Employees (CUPE); Canadian Union of Public Employees (CUPE) - Women's Committee; Canadian Union of Public Employees (CUPE), National Women's Task Force; Canadian Voice of Women for Peace / La Voix Canadiennes des Femmes pour la Paix; Canadian Women's Community Economic Development Council; Canadian Women's Foundation; Canadian Women's Health Network / Reseau Canadien pour la Sante des Femmes (CWHN/RCSF); Canadians for Choice; CARAL - 2; Centre for Equality Rights in Accommodation - Toronto (CERA); Child Care Advocacy Association of Canada / Association Canadienne pour la Promotion des Services de Garde a l'Enfance; Childcare Resource and Research Unit; Committee for Domestic Workers and Caregivers' Rights; Congress of Black Women; Disable Women's Network Quebec; Disabled Women's Network Canada / Reseau d'Action des Femmes Handicappes du Canada (DAWN); Federation des femmes du Quebec (FFQ); Federation de ressources d'hebergement pour femmes violentees et en difficulte du Quebec ; Feminists for Just and Equitable Public Policy (FemJEPP); Intercede; Intercede; International Women of Saskatoon; Kaushee's Place - Yukon Women's Transition Home; Les EssentiElles; Manitoba Women's Advisory Council; Match International ; Media Watch; Memorial Women's Studies Department; Metis National Council of Women / Conseil National des Femmes Metisses; Mother of the Red Nations (MORN); Mother's Are Women / Meres ET Femmes; National Action Committee on the Status of Women - British Columbia; National Action Committee on the Status of Women / Comite Canadien d'Action sur le Statut de la Femme



(NAC); National Association of Women and the Law (NAWL); National Council of Women in Canada / Conseil National des Femmes du Canada (NCWC); National Organization of Immigrant and Visible Minority Women and Canada / Organisation Nationales des Femmes Immigrantes et des Femmes Appartenant une Minorite (NOIVMWC - National Office); Native Women's Association of Canada / Association des Femmes Autochtones du Canada (NWAC); Nobel Women's Initiative; Older Women's Network; Ontario Association of Interval and Transition Houses (OAITH); Power Camp National / Filles d'action; Provincial Advisory Council on the Status of Women; Quebec Native Women Association / Association des Femmes Autochtones du Quebec (QNWA/AFAQ); "Regroupement provincial des maison d'hébergement ; et de transition pour femmes victimes ; de violence conjugale"; Regroupement québécois des CALACS (Centres d'aide et de lutte contre les agressions a caractere sexuel); Relais-Femmes; Riverdale Immigrant Women's Centre (RIWC); The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - BC (CEDAW - BC); Toronto Women's City Alliance; United Nations Development Fund for Women, Winniped Chapter; United Nations Platform for Action Committee (UNPAC); Vancouver Rape Relief and Women's Shelter; Vancouver Status of Women; Vancouver Women's Health Collective; Victoria Faulkner Women's Centre; Toronto Women for a Just and Healthy Planet; Women's Habitat of Etobicoke; Women's Health in Women's Hands; Women in Resource Development Inc.; Women's Inter-Church Council of Canada; Womenspace; Womenspace National Office; Centre for Northern Families / Yellowknife Women's Society; Yukon Status of Women Council; YWCA Canada - National Office / YWCA Canada - Office Nationale; YWCA of Moncton; YWCA Yellowknife.

<sup>39</sup> FAFIA, p. 2.

<sup>40</sup> CCD, p. 2.

<sup>41</sup> NWAC, p. 2, 3.

<sup>42</sup> Egale, p. 3, 4.

<sup>43</sup> FAFIA, p. 5.

<sup>44</sup> AI, p. 4; NWAC, p. 1.

<sup>45</sup> AI, p. 4.

<sup>46</sup> AI, p. 7.

<sup>47</sup> FAFIA, p. 6.

<sup>48</sup> CCRC, p. 5.

<sup>49</sup> FIACAT, p. 4.

<sup>50</sup> LDL, p. 5; AI, p. 6.

<sup>51</sup> AI, p. 5.

<sup>52</sup> ILC, p. 2.

<sup>53</sup> JS6, p. 6, 7 ; IPA, p. 4, 5.

<sup>54</sup> CRARR, p. 1.

<sup>55</sup> AI, p. 7.

<sup>56</sup> MEPACQ, p. 5.

<sup>57</sup> ICLMG, p. 3.

<sup>58</sup> RSF, p 1, 2.

<sup>59</sup> RSF, p. 1, 2.

<sup>60</sup> PEN Canada, 6.

<sup>61</sup> ICLMG, p. 2.

<sup>62</sup> LDL, p. 5.

<sup>63</sup> CRARR, p. 4.

<sup>64</sup> NUPGE, p. 1.

<sup>65</sup> KAIROS, p. 4.

<sup>66</sup> LDL, p. 3.

<sup>67</sup> AI, p. 5.

<sup>68</sup> KAIROS, p. 3.

<sup>69</sup> AI, p. 5.

<sup>70</sup> CPJ, p. 6.

<sup>71</sup> CCRC, p. 5.

<sup>72</sup> JS3: Women's Housing Equality Network (WHEN-Canada); CERA – Centre for Equality Rights in Accommodation.

<sup>73</sup> JS3, p. 9.

<sup>74</sup> FAFIA, p. 3.

<sup>75</sup> FAFIA, p. 1, 2.

<sup>76</sup> WI, p. 1, 2.

<sup>77</sup> PLS, p. 1.

<sup>78</sup> CPJ, p. 2.

<sup>79</sup> FI, p. 3.

<sup>80</sup> MEPACQ, p. 3.

<sup>81</sup> LDL, p. 3.

<sup>82</sup> AIDSLAW, p. 1.

<sup>83</sup> AIDSLAW, p. 2.

<sup>84</sup> AIDSLAW, p. 3.

<sup>85</sup> AIDSLAW, p. 4.

<sup>86</sup> FI, p. 4.

<sup>87</sup> ROC, p. 1, 2.

<sup>88</sup> CFC, p. 1, 3.

<sup>89</sup> KAIROS, p. 5.

<sup>90</sup> FAFIA, p. 6.

<sup>91</sup> JS2, p. 3.

<sup>92</sup> AFN, p. 3.

<sup>93</sup> KAIROS, p. 1.

<sup>94</sup> FNS, p. 3.

<sup>95</sup> FNS. P. 4, 5.

<sup>96</sup> KAIROS, p. 2.

<sup>97</sup> FNS. P. 4, 5.

<sup>98</sup> LCAC, p. 1.

<sup>99</sup> JS2, p. 1, 2.

<sup>100</sup> WWKN, p. 1.

<sup>101</sup> LLIN, p. 5.

<sup>102</sup> LLIN, p. 3.

<sup>103</sup> AI, p. 4.

<sup>104</sup> ACFN, p. 1.

- <sup>105</sup> ACFN, p. 3.
- <sup>106</sup> ACFN, p. 5.
- <sup>107</sup> ACFN, p. 3.
- <sup>108</sup> JS5, p. 1-3.
- <sup>109</sup> FIACAT, p. 4.
- <sup>110</sup> APNQL, p. 1.
- <sup>111</sup> APNQL annex, p. 7.
- <sup>112</sup> INET, p. 3.
- <sup>113</sup> INET, p. 5.
- <sup>114</sup> NWAC, p. 1.
- <sup>115</sup> AFN, p. 5.
- <sup>116</sup> CRCIML, p. 2.
- <sup>117</sup> AI, p. 5; FI, p. 5.
- <sup>118</sup> CPTI, p. 1.
- <sup>119</sup> CPTI, p. 2.
- <sup>120</sup> KAIROS, p. 3.
- <sup>121</sup> ICLMG, p. 2.
- <sup>122</sup> ICLMG, p. 2, 3.
- <sup>123</sup> FIACAT, p. 1, 2.
- <sup>124</sup> ICLMG, p. 4.
- <sup>125</sup> AI, p.6; CHRI, p. 2.
- <sup>126</sup> CCPJ, p. 3.
- <sup>127</sup> CCPJ, p. 4.
- <sup>128</sup> CCPJ, p. 5.
- <sup>129</sup> RSF, p. 2.
- <sup>130</sup> MEPACQ, p. 5.
- <sup>131</sup> FIACAT, p. 2.
- <sup>132</sup> JMHC, p. 1.
- <sup>133</sup> CCVT, p. 3.
- <sup>134</sup> JMHC, pp. 2-3.
- <sup>135</sup> ICLMG, pp. 3-4: AI, p. 6; CHRI, p. 1.
- <sup>136</sup> LDL, p. 3.
- <sup>137</sup> FIACAT, pp. 2-3.
- <sup>138</sup> ROC, p. 1, LDL, pp. 4-5; AI, p. 6; CHRI, p. 2.
- <sup>139</sup> LRWC, p. 1.
- <sup>140</sup> CHRC, p. 1.
- <sup>141</sup> FNS, p. 5.
- <sup>142</sup> AI, p. 3.
- <sup>143</sup> CHRC, p. 4.

<sup>144</sup> CCPI, pp. 1-2.

<sup>145</sup> ACPD, p. 1.

<sup>146</sup> ACPD, p. 5.

<sup>147</sup> JS6, p. 3, 4.

-----